

# Cambios Diferenciales y Economía Nacional

(Exclusivo para CLARIN)

La extracción y exportación del petróleo contenido en nuestro subsuelo, desde sus comienzos han sido realizadas por trusts extranjeros, es decir, por grandes consorcios con asientos en el exterior, que operan internacionalmente y tienen en el país subsidiarias —las compañías petroleras— a nombre de las cuales les fueron otorgadas las concesiones. Integrados esos trusts a las economías de sus países de origen, siempre han operado y continuarán operando persiguiendo el objetivo de obtener los mayores beneficios succionándole al país su riqueza —la extracción del subsuelo y la fuerza de trabajo de los obreros y empleados venezolanos— a cambio del pago de un "royalty" y de diversos impuestos, ingresos que sólo 26 años después de haber sido iniciada la extracción del petróleo revistieron determinada importancia con la promulgación en 1943 de la vigente Ley de Hidrocarburos.



Antes, concretamente hasta la trascendental huelga que lleva a cabo los trabajadores petroleros — diciembre 1936 — febrero 1937 — los "campos petroleros" los tenían constituidos las compañías en pequeños estados dentro del Estado, en los que ejercían los más absolutos poderes sometiendo a los trabajadores a exhaustiva explotación y disponiendo del petróleo como mejor les convenía. Favorecidos por la complacencia traída de las clases gobernantes, de funcionarios y abogados criollos, los trusts lograron su poder de concesiones sobre los más ricos e importantes yacimientos, así como también en tanto el "royalty" como los impuestos se los fueron en irrisorias cantidades. En 1942 para una producción de 28 millones de bbls y una exportación de Bs. 600 millones, pagaron por "royalty" e impuestos Bs. 123 millones. Como consecuencia de posteriores modificaciones introducidas en la Ley de Hidrocarburos sobre la Renta — diciembre 1942 y diciembre 1950 —, de haber sido uniformada el "royalty" en 18-23 de la producción y por el incremento de la producción, esos ingresos aumentaron considerablemente, pasando del treinta por ciento de los ingresos ordinarios del Fisco en 1942 a sesenta por ciento en 1950, elevando una vez más la vida económica, social y política del país. Los trusts petroleros han concurrido a la enflaquecimiento en el derrocamiento de gobiernos — octubre 1945, enero 1958 —, han participado en las elecciones para el poder ejecutivo, en las elecciones de candidaturas municipales y a Cuerpos Colegiados, condicionando en general la política económica, social y cultural del país por el fin de mediatizarla y de obtener los más grandes beneficios.

Por otra parte, desde que comenzó a ser exportado el petróleo, la balanza comercial hasta entonces con superávit, dejó de serlo y pasó a ser deficitaria. Si en 1917-18 las exportaciones de café, cacao, etc., montaron a Bs. 97.122.000 y las de petróleo —las primeras— a Bs. 899.677 y las importaciones a Bs. 80.949.000 con un superávit —que

fue el último— de 16 millones, dos años después la balanza ya fue deficitaria en Bs. 81.539.436 para seguir creciendo hasta colocarse en los Bs. 3.356 millones de 1962. Si al principio para saldar esos déficits fueron suficientes las divisas traídas por las compañías para hacerse de bolivares con los cuales cubrir sus gastos en el país —salarios, compra del "royalty", pago de impuestos—, posteriormente hubo necesidad de apelar a otras divisas —las ingresadas con fines de inversión—, pues del valor de las exportaciones de crudo y derivados las compañías retiraron en el exterior una cantidad cada vez mayor de esas divisas. En 1962, por ejemplo, del valor de esas exportaciones —Dls. 2.279 millones— las compañías sólo regresaron al país Dls. 1.237 millones, reteniendo por consiguiente en el exterior Dls. 1.041 millones, el 45,70 por ciento.

La anomalía de que el país como un todo se viera constreñido por el régimen existente de explotación de su petróleo por trusts integrados a economías extranjeras, a no disponer del total del valor de las exportaciones de su petróleo mientras sus importaciones se incrementaban desmesuradamente por efectos de ese mismo régimen, tenía que incidir desfavorablemente tanto en su intercambio internacional, como en la acumulación interna de capital nacional, en su desarrollo económico independiente y, consecuentemente, que se tuviera que tomar medidas para defender la estabilidad de su moneda. Así, en 1934 y para contrarrestar los efectos que pudiera acarrear la desvalorización que del dólar habían realizado en ese mismo año los Estados Unidos, el gobierno ratificó el contenido de oro fino —0,290323 gramos— que la Ley de Monedas de 1918 había establecido al crear el "bolívar oro". En 1936 los Ministros de Hacienda y de Fomento hicieron una declaración conjunta sobre política monetaria en el sentido de que se mantendría firmemente el contenido oro del bolívar respondiendo de esa manera a una campaña de Prensa pagada por

intereses extraños para presionar la baja del bolívar. En noviembre de 1937 fue fijado oficialmente el tipo de cambio en 3,09 para la compra de dólares "... con el fin de evitar las oscilaciones violentas que se experimentaban en el mercado, y adaptarlo a la situación de éste que conducía a una valorización espontánea del bolívar" y se establecieron las "primas de exportación" para proteger la agricultura y la cría, primas que serían sustituidas luego por el sistema de cambios diferenciales, aún en vigencia, que conjuntamente con el control de importaciones estableció el Decreto de julio de 1941.

La anomalía de la coexistencia de esas dos economías —la propiamente nacional y la petrolera, controlada desde el exterior por trusts extranjeros— da razón de fondo de las numerosas medidas, no sólo no ha desaparecido como lo afirman "técnicos" del Copei, sino que por el contrario, su incidencia en la vida del país se ha profundizado aún más en los últimos años, tal el caso de la recesión económica que se ha venido padeciendo y cuyo origen principal no ha sido otro que las represalias desencadenadas por los trusts contra la Nación por haber ésta elevado, mediante el Decreto de diciembre 1958 la escala del Compendio Nacional del Impuesto sobre la Renta con el fin de aumentar su participación en la explotación de su petróleo. En efecto, desde principios de 1959 —febrero y abril— los trusts rebajaron los precios del petróleo de Venezuela y a países del Medio Oriente, despidieron el veintidós por ciento de sus trabajadores, redujeron al mínimo las operaciones exploratorias, etc., logrando así al mismo tiempo aumentar los beneficios de sus Casas Matrices, rebajar al Fisco el monto de los ingresos con relación a lo que debía corresponderle dado el aumento habido en la producción y exportación y de la elevación del Compendio de la Renta. Las cifras testifican esa realidad y mientras ella subsista, mientras la Nación no recupere el dominio absoluto sobre la extracción, manipulación y venta en el interior y exterior de sus crudos y derivados, mientras su economía se encuentre mediatizada por trusts extranjeros, el "bolívar oro" con su contenido de 0,290323 gramos de oro fino y su cambio por dólar a la paridad oro tendrá que continuar siendo la base de su sistema monetario. Y es este contenido y paridad oro lo que las fuerzas progresistas tienen que defender, con los medios que sean necesarios, contra todas las maniobras, "teorías", presiones, agucias y marramucias que están empleando los trusts extranjeros a través del Fondo Mono-

## Salvador de La Plaza

29/12/63

tario Internacional y de funcionarios, técnicos y sectores de las complacientes y antinacionales clases poseedoras criollas.

Ahora bien, esa moneda estable, sana, dura no garantiza por sí misma al país las ventajas que conlleva, pues si de una parte asegura una mayor participación a la Nación en la explotación de su petróleo y un alto poder adquisitivo en el exterior que le permite proveerse de las maquinarias, equipos, materias primas requeridas para su desarrollo industrial y agropecuario y de los múltiples alimentos y artículos manufacturados que aún no produce y de los que su población tiene necesidad, por la otra, su dureza obstaculiza a los productores nacionales concurrir al mercado internacional con rubros que actualmente y en inmediato futuro pueden ser exportados. Zanjarse esa contradicción la Nación está en posibilidad y obligación de hacerlo, pues además de proptetaria del petróleo y del hierro que son extraídos y exportados, lo que convierte al Estado en el predominante poseedor de las divisas del país, es por encima de todo, soberana para darse el régimen monetario que mejor convenga al propio e independiente desarrollo económico. Y la solución estriba en establecer un estricto control sobre el cambio y ratificar el vigente sistema de tipos diferentes para la compra y la venta de las divisas. No se trata de innovaciones, sino de perfeccionar y adaptar a las actuales condiciones, el sistema iniciado con el Decreto de 1941 y que fue desvirtuado y corrompido con los Decretos de 1962 al devaluarse indirectamente el bolívar a 4,54 con el fin de recabar ingresos para el Fisco a costa de la masa de consumidores y trabajadores sobre cuyos hombros se ha hecho pesar la consiguiente alza del costo de la vida, el deterioro de los salarios reales y las mayores ganancias que por tales respectivos han obtenido comerciantes e inversionistas extranjeros. Ponerle fin a tal exacción, restituir al sistema su finalidad de defender los intereses nacionales, impedir la fuga de capitales, reducir el costo de la vida a la población y favorecer a más de la agricultura y la cría el desarrollo de la industria nacional, no sólo es técnicamente hacedero sino necesario y urgente realizarlo. En forma esquemática pueden adelantarse las siguientes bases:

de exportaciones de petróleo hierro y demás recursos naturales no-renovables, las que ingresen con el fin de inversiones o colocaciones en el país o por traslado de capitales: tipo de paridad oro con el dólar (3,04);

b).— para las que provengan de exportaciones de productos agropecuarios, industriales o artesanales: un tipo en relación a los precios que en el mercado internacional tengan similares productos pero siempre que hayan sido elaborados con cien por ciento de materias primas nacionales y abastecidas previamente y debidamente el mercado interno.

a).— tipo en torno a 3,20 para la adquisición de maquinarias, equipos, materias primas que no se produzcan en el país;

b).— tipo 3,35 para la adquisición de alimentos y artículos manufacturados que no se produzcan en el país y que sean de consumo corriente y necesario por parte de la población;

c).— tipo de 4,50 para la adquisición de artículos de lujo, para remesas —cuyo máximo deberá ser establecido por Ley especial— de intereses, dividendos, reexportación de capitales, para gastos en el exterior (viajes, etc.).

Este sistema concatenado con un riguroso control de importaciones y la protección arancelaria (abolida la exoneración de derechos), garantizará un desarrollo económico (agropecuario e industrial, independiente, sin cargar sobre los consumidores el "sacrificio" del alto costo de la vida que hoy se les impone para favorecer una mayor mediatización del país, mediante la actual industrialización artificial que enriquece a los inversionistas extranjeros, principalmente a los norteamericanos. En la lucha por esas medidas, las fuerzas progresistas se fortalecerán y compactarán porque son los intereses nacionales los que están en juego.

Todas las divisas que ingresen al país, independientemente de su origen —exportaciones pagas, inversiones, traslado de capitales— deberán ser adquiridas (Banco Central de Venezuela), exclusivamente por el Estado fijándose al efecto los siguientes tipos de compra:

a).— para las que provengan